



*No hay
otra opción
que resistir*

LIDERESAS DE PROCESO
DE COMUNIDADES NEGRAS

*No Choice
But to Resist*

WOMEN LEADERS OF
BLACK COMMUNITIES PROCESS

Publicado en 2019, por Proceso de Comunidades Negras y MADRE

Coordinación: Charo Mina Rojas

Fotografía: Maureen Drennan

Diseño: Paul Gagner

Concepto: Lisa Davis

Gracias a todas las líderes de Proceso de Comunidades Negras que dieron tiempo para compartir sus historias y sus imágenes para este libro. Que sus vidas y su lucha inspiren un mayor apoyo para la justicia racial, de género y ambiental en Colombia y en todo el mundo.

Gracias a la Clínica de Derechos Humanos y Justicia de Género en la Facultad de Derecho de CUNY por su apoyo. Gracias también a Antonio Pontón-Núñez, Meagan Barrera y Rebecca Pendleton por entrevistar, transcribir y traducir, y a J.M. Kirby por editar.

Acerca de la fotógrafa: Maureen Drennan es una fotógrafa nacida en Nueva York. Su trabajo se ha incluido en exposiciones en los principales museos, incluida la Galería Nacional de Retratos en Washington DC, entre otros. Sus imágenes también se han presentado en varios principales medios de noticias de Estados Unidos. Es profesora en LaGuardia Community College en la ciudad de Nueva York.

Published 2019, by Proceso de Comunidades Negras and MADRE

Coordination: Charo Mina Rojas

Photography: Maureen Drennan

Design: Paul Gagner

Concept: Lisa Davis

Thank you to all the women leaders of Proceso de Comunidades Negras who took time to share their stories and their images for this book. May your lives and struggle inspire greater support for racial, gender and environmental justice in Colombia and globally.

Thank you to the Human Rights and Gender Justice Clinic at CUNY School of Law for its support. Thank you also to Antonio Pontón-Núñez, Meagan Barrera, and Rebecca Pendleton for interviewing, transcribing and translating, and to J.M. Kirby for editing.

About the photographer: Maureen Drennan is a New York City-born and based photographer. Her work has been included in exhibitions in major museums, including the National Portrait Gallery in Washington DC, amongst several others. Her images have also been featured in several major U.S. news outlets. She teaches at LaGuardia Community College in New York City.

No hay otra opción que resistir

LIDERESAS DE PROCESO
DE COMUNIDADES NEGRAS

No Choice But to Resist

WOMEN LEADERS OF
BLACK COMMUNITIES PROCESS

Las defensoras de los derechos humanos que aparecen en este libro, muchas de las cuales han dedicado toda su vida adulta a la justicia racial y de género, forman parte de una organización llamada Proceso de Comunidades Negras (PCN), que organiza comunidades Negras, Afrodescendientes, Palenqueras y Raizales en toda Colombia. Está compuesto por más de 120 organizaciones, individuos y entidades Negras autónomas denominadas Consejos Comunitarios, unidos en una lucha por la plena realización de los derechos humanos individuales y colectivos de las personas Afrodescendientes. Los Consejos Comunitarios como entidades gobernantes se derivan de la Ley 70 de 1993, que fue el resultado de años de lucha por parte del Pueblo Afrocolombiano para su reconocimiento como un Pueblo distinto con derechos culturales y territoriales. Aunque todavía no se ha implementado completamente, la Ley 70 establece la titulación y la propiedad colectiva del Pueblo Afrocolombiano de sus territorios.

Algunas de las mujeres cuyas imágenes ilustran las páginas de este libro fueron parte de movimientos que lograron protecciones y reconocimientos claves para el Pueblo Afrodescendiente en la Constitución de Colombia de 1991. Muchas de ellas se movilizaron en comunidades en toda Colombia para que se aprobara la Ley 70 de 1993, y desde entonces, para su implementación significativa. Muchas se han organizado para detener la violencia de género, para procurar reparaciones a las víctimas Afrodescendientes del conflicto armado de Colombia, para el desarrollo ambientalmente sostenible y la protección contra megaproyectos destructivos. Hacen este trabajo de soporte vital en comunidades que aún sufren de forma abrumadora la discriminación racial de larga data, la privación de infraestructura y servicios básicos y la negligencia general del estado.

Utilizando el arte, la educación, la protesta, la desobediencia civil, la sanación psicosocial, la incidencia y la documentación de derechos humanos, estas defensoras Afrodescendientes de los derechos humanos realizan el trabajo diario de construir el marco social del que depende la paz significativa en Colombia. Se movilizaron en toda Colombia para apoyar el fin del conflicto de décadas y para las protecciones históricas para los Pueblos Afrodescendientes e Indígenas que figuran en el acuerdo de paz de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de 2016. Notablemente, se atreven a sobresalir como activistas de derechos humanos y defensoras de sus territorios, en un momento en que esto conlleva un riesgo significativo en Colombia. Según una estimación, 550 defensores de los derechos humanos, desproporcionadamente Afrodescendientes e Indígenas, han sido asesinados en Colombia desde principios de 2016.

No hay un solo libro que por sí mismo puede contar las historias de las innumerables defensoras Afrocolombianas de los derechos humanos que han luchado por una paz significativa para sus comunidades y para toda Colombia. A través de este libro, PCN y MADRE, una organización internacional de derechos humanos de mujeres, tienen la intención de contribuir e inspirar documentación adicional sobre el papel de las mujeres Negras en esta historia en desarrollo. Incluye fotografías de mujeres líderes de PCN, junto con biografías breves que se basan en entrevistas con ellas. Las narraciones revelan vidas de lucha, que contienen momentos de alegría y dolor, de sufrimiento e inspiración. Lo que lo sustenta es una incesante dedicación a los derechos y el bienestar del Pueblo Afrocolombiano y sus territorios. En palabras de una mujer entrevistada, como mujeres, como personas Afrodescendientes en Colombia, “no tenemos otra opción que resistir.”

The women human rights defenders featured in this book, many of whom have devoted their entire adult lives to racial and gender justice, are part of an organization called Black Communities Process (PCN), which organizes in Black, Afro-descendant, Palenquera, and Raizal communities throughout Colombia. It is comprised of over 120 organizations, individuals, and Black self-governing entities called Community Councils, united in a struggle for full realization of Afro-descendants' individual and collective human rights. Community Councils as governing entities derive from Law 70 of 1993, which was the result of years of struggle on the part of Afro-Colombians for recognition as a distinct People with cultural and territorial rights. While yet to be fully implemented, Law 70 provides for Afro-Colombians' collective titling and ownership of their territories.

Some of the women whose images grace the pages of this book were part of movements that achieved key protections and recognition for Afro-descendant Peoples in Colombia's 1991 Constitution. Many of them mobilized in communities throughout Colombia for passage of Law 70 in 1993, and since then, for its meaningful implementation. Many have organized to halt gender-based violence, for reparations for Afro-descendant victims of Colombia's armed conflict, and for environmentally sustainable development and protection from destructive mega-projects. They do this life-sustaining work in communities which still overwhelmingly suffer from longstanding racial discrimination, deprivation of basic infrastructure and services, and overall state neglect.

Utilizing art, educational outreach, protest, civil disobedience, psycho-social healing, advocacy

and human rights documentation, these Afro-descendant women human rights defenders carry out the daily work of building the social framework on which meaningful peace in Colombia depends. They mobilized across Colombia in support of an end to Colombia's decades long conflict, and for the landmark protections for Afro-descendant and Indigenous Peoples contained in Colombia's 2016 peace accord with the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Notably, they dare to stand out as human rights activists and defenders of their territories, at a time when doing so carries significant risk in Colombia. By one estimate, 550 human rights defenders, disproportionately Afro-descendant and Indigenous, have been killed in Colombia since early 2016.

No one book can tell the stories of the countless Afro-Colombian women human rights defenders who have struggled for meaningful peace for their communities and all of Colombia. Through this book, PCN and MADRE, an international women's human rights organization, intend to contribute to and inspire further documentation of Black women's role in this unfolding history. It includes photographs of women leaders from PCN, alongside brief biographies that draw on interviews with them. The narratives unveil lives of struggle, containing moments of joy and pain, of suffering and inspiration. Undergirding it all is an unceasing dedication to the rights and wellbeing of Afro-Colombians and their territories. In the words of one interviewee, as women, as Afro-descendant people in Colombia, “we have no other option but to resist.”



Ana Granja Castillo

Ana Granja Castillo lleva más de 30 años organizando por los derechos humanos y los derechos territoriales colectivos de las personas Afrodescendientes. Actualmente es Presidenta de su Consejo Comunitario, El Consejo Comunitario del Río Patía Grande, sus brazos y la ensenada de Tumaco (ACAPA), también es Presidenta de la Mesa Redonda Municipal sobre Mujeres del municipio de Francisco Pizarro en Nariño y una miembro de Proceso de Comunidades Negras (PCN). Ana comenzó a organizarse en la década de 1980 como una lideresa comunitaria, trabajando para la titulación colectiva de los territorios Afrodescendientes con el Palenque Regional de Nariño, que ahora hace parte de PCN. Ella jugó un papel fundamental en el trabajo inicial de PCN, incluida ayudando abogar por la aprobación exitosa de la Ley 70 de 1993, que reconocía los derechos colectivos históricos de las comunidades Afrodescendientes en Colombia. Ana también desempeñó un papel en la defensa del título colectivo para su propia comunidad, que se otorgó en el 2000 después de una campaña extensa que involucró ir puerta por puerta, “evangelizando” como ella lo llama, para garantizar que cada miembro de la comunidad con un título de propiedad individual se uniera al reclamo por la titulación colectiva.

A través de esta campaña, la comunidad del río ganó el derecho sin precedentes a la autoridad colectiva sobre las áreas de manglares vinculadas a su territorio. Para Ana, ser parte de este proceso la capacitó como mujer para ayudar a otras mujeres Afrodescendientes en su comunidad y le permitió movilizarlas para defender sus derechos territoriales. Durante mucho tiempo su propuesta ha sido que “si durante años los hombres no han podido cambiar las políticas en Colombia, empoderemos a las mujeres para ver si de esta manera podemos avanzar.”

Su trabajo incluye capacitar a mujeres jóvenes en su comunidad para que se conviertan en lideresas y defiendan iniciativas como la implementación significativa de la Ley 1257 de 2008 para abordar la violencia de género y la Ley 70 de 1993, que protege los derechos colectivos de las personas Afrodescendientes. La falta de implementación de estas leyes preocupa a Ana. Las comunidades Afrodescendientes han abogado por la implementación de la Ley 70 desde su aprobación en 1993, ella señala, pero aún no se ha implementado completamente. Además, observa que están asesinando a las defensoras y los defensores de los derechos humanos por realizar trabajos para promover la ley y proteger su territorio colectivo. Ella misma ha recibido varias amenazas de muerte por su activismo para proteger los territorios Afrodescendientes de los megaproyectos agrícolas y mineros que dañan el medio ambiente.

Si el Estado no apoya los derechos territoriales de las comunidades Afrodescendientes, permanecerán empobrecidas y oprimidas, dice Ana. A pesar de haber experimentado triunfos a lo largo de su trabajo organizador, dice que todavía está esperando el momento en que las personas Afrodescendientes puedan avanzar todo el potencial de su larga lucha por los derechos territoriales colectivos.

Ana Granja Castillo has been organizing for Afro-Colombian's collective territorial and human rights for over 30 years. She is currently President of her Community Council, El Consejo Comunitario del Río Patía Grande, sus brazos y la ensenada de Tumaco (ACAPA), she is also President of the Municipal Roundtable on Women in the Francisco Pizarro municipality of Nariño, and a member of Black Communities Process (PCN). Ana began organizing in the 1980s as a community leader, working for

collective titling of Afro-descendant territories with the Regional Palenque of Nariño, now part of PCN. She played an instrumental role in PCN's early work, including helping advocate for successful passage of Law 70 of 1993 which recognized historical collective rights of Afro-descendant communities in Colombia. Ana also played a role in advocating for collective title for her own community, which was granted in 2000 after an extensive campaign involving going door to door, "evangelizing" as she calls it, to ensure that each community member with an individual land title united in a claim for collective titling. Through this campaign the river community won the unprecedented right to collective authority over mangrove areas linked to their territory. For Ana, being part of this process empowered her as a woman to help other Black women in her community and allowed her to mobilize them to defend their territorial rights. Her proposition has long been that "if for years men have not been able to change policies in Colombia, let's empower women to see if by this means we can move forward."

Her work includes training young women in her community to become leaders and advocate for

initiatives like meaningful implementation of Law 1257 of 2008 to address gender-based violence, and Law 70 of 1993, which protects Afro-descendant collective rights. The laws' lack of implementation worries Ana. Afro-descendant communities have been advocating for Law 70's implementation since its passage in 1993, she notes, but it has yet to be fully implemented. Moreover, she observes, Afro-descendant human rights defenders are being killed for carrying out work to promote the law and protect their collective territory. She herself has received several death threats for her activism to protect Afro-descendant territories from environmentally damaging agricultural and mining mega-projects.

If the State does not support Afro-descendant communities' territorial rights they will remain impoverished and oppressed, Ana says. Though she has experienced triumphs through the course of her organizing, she says that she is still awaiting the moment when Afro-Colombians are able to fully advance the full potential of their long-running struggle for collective territorial rights.

Clemencia Carabalí Rodallega

Clemencia Carabalí Rodallega es una mujer Afrocolombiana lideresa de los derechos humanos, quien forma parte tanto de Proceso de Comunidades Negras (PCN) como de la Asociación Municipal de Mujeres (ASOM) de Buenos Aires basada en el Norte del Cauca. Clemencia firmemente cree en la organización comunitaria, y se asegura de que sus iniciativas de organización y defensa estén arraigadas en los aportes de la comunidad local. Comenzó su trabajo para defender y promover los derechos territoriales y los derechos humanos de las personas Afrodescendientes junto a su hermano en un proyecto de desarrollo agrícola local, donde organizó y ayudó

a mujeres a desarrollar parcelas de tierra de forma sostenible. Recientemente, ella ha ayudado a crear protocolos de autoprotección comunitarios pacíficos con un enfoque de género en su comunidad.

En su papel en ASOM, ella capacita a mujeres en autoprotección colectiva, defiende la protección de los territorios Afrodescendientes y trabaja para el desarrollo de economías agrícolas locales sostenibles para mujeres. También realiza capacitaciones de empoderamiento para mujeres para contrarrestar la violencia de género, mejorar las relaciones entre familias, y promover la independencia económica. Clemencia y miembros de su organización han





recibido numerosas amenazas por su trabajo, lo que los obliga a moverse constantemente o encontrar refugio en diferentes comunidades.

El trabajo de Clemencia en defensa de los derechos humanos, como el de muchas otras defensoras de los derechos humanos de las mujeres Afrodescendientes, es denigrado y difamado como un apoyo a la guerrilla, alimentando aún más las críticas y la violencia contra ella. En un caso particular, los paramilitares se enfrentaron a Clemencia en un intento de amenazarla e intimidarla. Ella estaba embarazada en ese momento e inmediatamente tuvo un aborto espontáneo después de la confrontación. Hace unos seis meses, Clemencia recibió amenazas de muerte por defender los derechos humanos. “Los grupos armados me llamaron para decirme que yo estaba obstaculizando planes de desarrollo minero en la región. Afortunadamente, puedo recibir protección gubernamental debido a mi estatus y trabajo, a diferencia de mis colegas que trabajan en el terreno. Yo no hago este trabajo sola; hacemos este trabajo junto por las mujeres, para las mujeres. El gobierno debe desarrollar estrategias que garanticen nuestros derechos humanos básicos, los cuales incluyen el derecho a la consulta comunitaria, el derecho a nuestro territorio y el derecho a vivir en nuestra tierra.”

Las amenazas no han detenido el trabajo de Clemencia para promover la agencia de mujeres Afrodescendientes. Dirigió la creación de una escuela para mujeres Afrodescendientes, “Mujeres Constructoras de Paz”, una iniciativa apoyada por una importante universidad, la Universidad del Valle, entre otras. Más de 100 mujeres Afrodescendientes de la región han asistido a la escuela, lo que ha fortalecido su nivel y calidad de participación en la toma de decisiones que es relevante para su bienestar y para el desarrollo regional.

“Nosotros tenemos mucho miedo de que el gobierno no cumpla con los acuerdos hechos con comunidades Afrodescendientes como la mía. Sabemos lo que es vivir en el conflicto, y no queremos

volver a eso. Pero aún vivimos en un conflicto: el conflicto de racismo, de pobreza, de exclusión, y de olvido,” dice ella.

Clemencia Carabalí Rodallega is an Afro-Colombian human rights leader, and member of both Black Communities Process (PCN), and the Buenos Aires Municipal Women’s Association (ASOM) based in the Norte del Cauca region. Clemencia strongly believes in community-based organizing, and she ensures that her organizing and advocacy initiatives are rooted in local community input. She began her work to defend and promote Afro-Colombian human and collective territorial rights alongside her brother in a local agricultural development project, where she organized and assisted women in sustainably developing plots of land. Recently, she has helped create peaceful community self-protection protocols with a gender focus in her community.

In her role at ASOM, she trains women in collective self-protection, advocates for protection of Afro-descendant territories, and works for development of sustainable local agricultural economies for women. She also works conducts women’s empowerment trainings to counter gender-based violence, improve inter-family relationships, and promote economic independence. Clemencia and members of her organization have received numerous threats for their work, and must constantly move or find refuge in different communities.

Clemencia’s human rights defense work, like that of many other Black women human rights defenders, is denigrated and smeared as being supportive of guerrillas, further fueling the criticism and violence against her. In one instance, paramilitary members confronted Clemencia in an attempt to threaten and intimidate her. She was pregnant at the time and immediately miscarried after the confrontation. Around six months ago, Clemencia received death threats for her human rights defense work. “Armed groups called me to say I was hindering the mining

development plans for the region. Thankfully, I am able to receive government protection because of my status and work, unlike my colleagues doing work on the ground. I do not do this work alone -- we do this work together by women, for women. The government has to develop strategies that will guarantee our basic human rights, which include the right to community consultation, the right to our territory, and the right to live on our land.”

Clemencia opposes commercial mining in her region, which the Colombian government is heavily promoting in the post peace-agreement context. Mining companies establish themselves in the region without community input, undermining decades-long work to build strong sustainable community development plans, she says. Moreover, toxic mining chemicals pollute rivers, affecting communities’ health and livelihood. Clemencia is also concerned that mining attracts armed groups, and notes that her community

has seen new armed actors in the area, alongside the influx of mining concessions.

The threats have not halted Clemencia’s work to promote Afro-descendant women’s agency. She led the creation of a school for Afro-descendant women, “Women Peace Builders,” an initiative supported by a major university, Universidad del Valle, among others. Over 100 Afro-descendant women from the region have attended the school, which has strengthened their level and quality of participation in decision-making that is relevant to their well-being and to regional development.

“We are very afraid that the government will not comply with the agreements made with Afro-Colombian communities like mine. We know what it’s like to live in conflict, and we do not want to go back to that. But we still live in a conflict -- the conflict of racism, of poverty, of exclusion, and of oblivion,” she says.

Dalia Mina Valencia

Dalia Mina Valencia es una líder Afrocolombiana quien hace parte del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí, y una miembro fundadora de Proceso de Comunidades Negras (PCN). Ella señala que muchos miembros fundadores de PCN como ella comenzaron sus carreras a través de la capacitación y organización basadas en la comunidad local, haciendo énfasis en la larga historia de la construcción de movimientos y resistencia a la injusticia entre las comunidades Negras de Colombia. “[PCN] nació de organizaciones comunitarias ya existentes cerca de los ríos,” dice ella.

Dalia comenzó su trabajo como líder social en los años 1990 como secretaria de la Asociación Popular de Afrodescendientes Unidos del Río Yurumanguí. Como defensora de los derechos humanos y miembro de la comunidad, se enfrentó a un gran riesgo. Yurumanguí sufrió una violencia desproporcionada relacionada con

el conflicto y ataques contra líderes sociales. En abril de 2005, por ejemplo, los paramilitares torturaron y asesinaron a doce jóvenes miembros de la comunidad, muchos de ellos familiares de líderes sociales. Esta fue una de las múltiples masacres en el municipio de Buenaventura.

A pesar de los peligros que enfrentó, cuando promulgó la nueva Constitución Colombiana y la Ley 70 en la década de 1990, ella abogó por los derechos territoriales colectivos para las comunidades Afrodescendientes en la región suroeste del Pacífico. Ella organizó Consejos Comunitarios para trabajar juntos en los procesos de adjudicación territorial colectivos, lo que resultó en la adquisición de parcelas más grandes de territorios Afrocolombianos colectivos.

Además de su incidencia por los derechos territoriales colectivos, Dalia ha trabajado para el empoderamiento y la educación en las comunidades





Negras, particularmente en momentos en que los actores armados reclutaban activamente a los y las jóvenes vulnerables por la falta de acceso educativo adecuado y otros apoyos. Además, organizó iniciativas de soberanía alimentaria y agricultura sostenible en comunidades cercanas al Río Yurumanguí.

Dalia sigue abogando por los derechos de las personas Afrodescendientes hasta el día de hoy, incluyendo llevando a cabo incidencia contra los megaproyectos de minería en sus territorios. “Las promesas incumplidas de la Ley 70 sigue obstaculizando el proceso de nuestras comunidades,” dice ella. “Sin embargo, los líderes de derechos humanos actuales y pasados han arraigado precedentes en la defensa de nuestras comunidades. Espero que nuestro trabajo inspire a las generaciones más jóvenes a construir sobre ese precedente y avanzar en nuestra lucha.”

Ella se opone al apoyo gubernamental a la minería comercial en la región, ya que no crea empleos sostenibles y saludables, y porque contamina los ríos. En 2018, su Consejo Comunitario logró un éxito a través de los tribunales, ganando derechos colectivos para más de 135 acres de tierra en contra de los reclamos de una compañía minera, Pacific Mines S.A.S., que había recibido una concesión minera por parte del gobierno. Dalia cree que una parte esencial de la victoria de la comunidad en este caso estuvo relacionada con el trabajo de las mujeres en su comunidad. “Las mujeres son una parte fundamental del proceso de organización de Yurumanguí.”

Dalia Mina Valencia, an Afro-Colombian leader, is part of the Community Council of the Yurumanguí River Basin, and a founding member of Black Communities Process (PCN). She notes that many founding PCN members like her started their careers through local community-based training and organizing, emphasizing the long history of movement building and resistance to injustice among Colombia’s Black communities. “[PCN] was born from

already existing community organizations near the rivers,” she says.

Dalia began her work as a social leader in the 1990s as secretary of the Popular Association of United Afro-descendants of the Yurumanguí River. As a human rights defender and member of the community, she faced great risk. Yurumanguí suffered disproportionate conflict-related violence and attacks on social leaders. In April 2005, for example, paramilitaries tortured and assassinated twelve young community members, many of them relatives of social leaders. This was one of multiple massacres in the municipality of Buenaventura.

Despite the dangers she faced, when the new Colombian Constitution and Law 70 were enacted in the 1990s, Dalia advocated for collective territorial rights for Afro-Colombian communities in the Pacific Southwest region. She organized Community Councils to work together in collective territorial adjudication processes, which resulted in the acquisition of larger parcels of collective Afro-descendant territories.

In addition to her advocacy for collective territorial rights, Dalia has worked for youth empowerment and education in Black communities, particularly at times when armed actors were actively recruiting youth made vulnerable by a lack of adequate educational access and other supports. In addition, she organized food sovereignty and sustainable agricultural initiatives in communities near the Yurumanguí River.

Dalia continues her advocacy for Afro-descendants’ rights today, including advocating against mining mega-projects in their territories. “The unfulfilled promises of Law 70 continue to hinder progress in our communities,” she says. “However, current and past human rights leaders have rooted precedent in defending our communities. I hope that our work inspires younger generations to build on that precedent and advance our fight.”

She opposes government support for commercial mining in the region, since it does not create sustainable, healthy jobs, and because it pollutes rivers.

In 2018, her Community Council achieved success through the courts, winning collective territorial rights over 135 acres of land against the claims of a mining company, Pacific Mines S.A.S., which had received a government-granted mining concession. Dalia believes

that an essential part of the community's victory in this case was related to the work of women in her community. "Women are a fundamental part of the Yurumanguí organizing process."

Danelly Estupiñan

Desde que se unió al Proceso de Comunidades Negras (PCN) en la década de los 90 a los 16 años de edad, Danelly Estupiñan ha luchado por la justicia ambiental y por los derechos humanos sociales y económicos en su ciudad natal de Buenaventura, una ciudad portuaria en la costa pacífica colombiana. Mientras que la ciudad es crucial para la economía de Colombia, a la mayoría de la población Afrocolombiana de Buenaventura se les niega el acceso a servicios básicos como el suministro interrumpido y continuo de agua, escuelas adecuadamente financiadas y una infraestructura sanitaria. Cuando Danelly empezó su activismo, Buenaventura se enfrentó a la privatización del puerto, lo cual llevó a aumentar el desempleo y la pobreza. Los 90s también trajeron una afluencia de violencia paramilitar a la ciudad.

Danelly ha trabajado en acabar la violencia, incluyendo violencia de género, al mismo tiempo que reclama la protección de los derechos ambientales y territoriales frente a la expansión del puerto que amenaza con desplazar a las antiguas comunidades de pescadores Afrodescendientes. Su trabajo ha incluido acciones creativas, como "duchas de balde" para demostrar cómo los residentes se bañan en una ciudad que les niega el agua, mientras la misma ciudad proporciona agua las 24 horas del día a la nueva infraestructura turística y desarrollos portuarios.

Si bien la guerra contra las FARC ha terminado oficialmente, la violencia política continúa hasta hoy, con defensoras de los derechos humanos como Danelly encontrándose altamente amenazadas. En 2018, un defensor de los derechos humanos y el medio ambiente

de PCN, Temistocles Machado, fue asesinado en Buenaventura, poco después un levantamiento masivo y pacífico se paralizó la actividad portuaria durante semanas. La misma Danelly ha sido amenazada por su trabajo. En 2015, se vio obligada salir de Buenaventura por un mes. A principios de 2019, ella una vez más comenzó a recibir amenazas y fue sujeta de vigilancia ilegal, incluso estando acompañada por un esquema de seguridad patrocinado por el gobierno.

"En Colombia," ella dice, "todos los defensores de los derechos humanos son considerados criminales," refiriéndose a la criminalización histórica y en curso por parte del estado a los activistas pacíficos, incluyendo a las mujeres Negras defensoras de los derechos humanos Sara Quiñonez Valencia y Tulia Marys Valencia, actualmente detenidas en una prisión de máxima seguridad con cargos inventados. Ella siente que, para realmente minimizar las amenazas a sus vidas, además de brindar protección a las defensoras y los defensores de los derechos humanos, el gobierno debe tomar medidas significativas para defender los derechos territoriales de las personas Afrodescendientes e Indígenas.

Danelly ha documentado la violencia de género (VBG) y ha acompañado mujeres víctimas de la VBG en Buenaventura desde 2010. Más recientemente, coordinó la documentación de 102 casos de la VBG contra mujeres Afrodescendientes en cuatro regiones del país, esta documentación está compilada en el tercer informe de PCN sobre la situación de las mujeres Afrocolombianas.

Danelly cree que una de las mejores maneras para





reconstruir una paz en Colombia y especialmente en comunidades Afrocolombianas, no es solo a través de la defensa y el acompañamiento, sino también educando jóvenes Afrodescendientes a acoger su cultura y etnicidad. “A través de la enseñanza a los jóvenes de nuestras practicas ancestrales,” ella dice, “ellos aprenden valores de integridad y respeto mutuo. A partir de esto ellos empiezan a practicar empatía y son capaces de tomar posesión del proceso colectivo y a defender sus derechos como personas Afrodescendientes. También les enseña cómo construir solidaridad dentro de sus comunidades, al mismo tiempo a crear alianzas con otros movimientos de derechos humanos.”

Since joining Black Communities Process (PCN) in the 90s at the age of 16, Danelly Estupiñan has fought for environmental justice and for social and economic human rights in her hometown of Buenaventura, a port town on Colombia’s Pacific Coast. While the city is crucial to Colombia’s economy, Buenaventura’s majority Afro-descendant population is denied access to basic services like continuous water, adequately funded schools and healthcare infrastructure. When Danelly began her activism, Buenaventura faced port privatization, which led to increased unemployment and poverty. The 90s also brought an influx of paramilitary violence to the city.

Danelly has worked to end violence, including gender-based violence, while also calling for environmental and territorial rights protection in the face of port expansion that threatens to displace longstanding Afro-descendant fishing communities. Her work has included creative actions, like public “bucket showers” to demonstrate how residents bathe in a city that denies them water, while providing 24-hour water to new tourist infrastructure and port developments.

While the war against the FARC is officially over, political violence continues today, with human rights defenders like Danelly finding themselves increasingly

threatened. In 2018, PCN environmental and human rights advocate, Temistocles Machado, was assassinated in Buenaventura, not long after a massive, peaceful uprising brought port activity to a standstill for weeks. Danelly herself has been threatened for her work. In 2015, she was forced to flee Buenaventura for a month. In early 2019, she again began receiving threats and was subject to illegal surveillance, even while being accompanied by state-sponsored security detail.

“In Colombia,” she says, “all human rights defenders are considered criminals,” referring to the states’ historical and ongoing criminalization of peaceful activists, including Black women human rights defenders Sara Quiñonez Valencia and Tulia Marys Valencia, currently held in a maximum security prison on trumped up charges. She feels that to truly minimize the threat to their lives, in addition to providing protection for human rights defenders, the government must take meaningful steps to uphold Afro-descendant and Indigenous territorial rights.

Danelly has been documenting gender-based violence (GBV) and accompanying women victims of GBV in Buenaventura since 2010. Most recently she coordinated documentation of 102 cases of GBV against Afro-descendant women in four regions of the country, compiled in PCN’s third report on the situation of Afro-Colombian women.

Danelly believes that one of the best ways to rebuild peace in Colombia and especially in Afro-Colombian communities, is not only through advocacy and accompaniment, but by educating Afro-Colombian youth to embrace their culture and ethnicity. “By teaching our youth about our ancestral practices,” she says, “they learn values of integrity and mutual respect. From this they begin to practice empathy and are able to take ownership of the collective process and defend their rights as Afro-Colombians. It also teaches them how to build solidarity within their communities and create alliances with other human rights movements.”

Dorina Hernández Palomino

Dorina Hernández Palomino comenzó su trabajo organizando por los derechos culturales de las personas Afrodescendientes en los años 1980 y es una de las miembros fundadoras de Proceso de Comunidades Negras (PCN). Su trabajo se centra fomentar la identidad de la cultura Afrocolombiana. Ella dedicó su tiempo a la enseñanza del lenguaje Palenque y a abordar el analfabetismo en su comunidad, y luego comenzó a desarrollar una política nacional sobre Etnoeducación con un enfoque diferenciado en las personas Afrodescendientes. Mediante sus esfuerzos por enseñar y promover la identidad cultural Afrocolombiana y el idioma Palenque, contribuía a la recuperación del idioma usado entre comunidades Afrocolombianas. Para Dorina, la construcción colectiva de la identidad cultural y la educación Afrocolombiana, que ha ayudado a impulsar hacia adelante el movimiento en apoyo a las comunidades Negras, ha sido una de las partes más agradables de su trabajo.

Su trabajo para revitalizar el idioma Palenque comenzó como un proyecto pequeño local para asegurar que su comunidad no perdiera su identidad cultural. Ella creía que, para lograr el propósito de revivir la identidad cultural Afrocolombiana, era necesario reforzarla mediante la enseñanza de idiomas en las escuelas. Ella empezó a enseñar la primera clase formal de idioma, historia y cultura Palenque en una escuela local en Cartagena. Recuerda que, cuando comenzó, ella les dijo a sus estudiantes que no entendía el español con el fin de animarlos a hablar solo Palenque en el aula, y para alentar a los padres a usar Palenque cuando se reunieran con ella. Finalmente, el programa se expandió y se formó un equipo de investigadores para desarrollar más investigación académica sobre la cultura y la historia Palenque, para crear un alfabeto escrito para el idioma Palenque, y posteriormente para

desarrollar diccionarios de Palenque. Dorina comenzó este proceso en 1986, y para 1989 sus iniciativas habían recibido el apoyo de entidades gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Educación. Después de la aprobación de la Ley 70 en 1993, dirigió el programa de etnoeducación del Ministerio de Educación, y formó parte de los procesos que llevaron a la legislación que exigían la inclusión de la historia Negra en los currículos escolares, y al fortalecimiento de los derechos de los maestros Negros, entre otros logros.

Dorina actualmente ayuda a mujeres Afrocolombianas en su comunidad a aprovechar sus prácticas culturales tradicionales en actividades económicas que beneficiarán a sus comunidades. Esto incluye ayudarlas a desarrollar microempresas y recibir certificaciones cuando sea necesario para ingresar a mercados formales. Las mujeres en su comunidad han desarrollado un negocio de dulces tradicionales, un recorrido gastronómico del corregimiento de San Basilio de Palenque, así como una escuela de cocina para enseñar los métodos de cocina tradicional a los y las jóvenes en la comunidad. También están trabajando en el desarrollo y producción de cultivos orgánicos para tener una mayor soberanía alimentaria. Dorina se considera a si misma una verdadera defensora de los derechos de las mujeres Afrocolombianas y cree que apoyar la igualdad para las mujeres Afrocolombianas fortalece el movimiento de derechos humanos Afrocolombianos en general.

Dorina Hernández Palomino began organizing for Afro-Colombian cultural rights in the 1980s and is one of the founding members of Black Communities Process (PCN). Her work centers on promoting Afro-Colombian cultural identity. She devoted time to teaching the Palenque language and addressing





illiteracy in her community, and then began developing a national policy on Ethno-education with a differentiated focus on Afro-Colombians. Through her efforts to teach and promote Afro-Colombian cultural identity and the Palenque language, she contributed to the recovery of the language amongst Afro-Colombian communities. For Dorina, the collective construction of Afro-Colombian cultural identity and education, which has helped to push the movement forward in support of Black communities, has been one of the most enjoyable parts of her work.

Her work to revitalize the Palenque language began as a small local project to ensure that her community did not lose its cultural identity. She believed that in order to achieve the goal of reviving Afro-Colombian cultural identity, it was necessary to reinforce it through language instruction in the schools. She began teaching the first formal class on Palenque language, history and culture in a local school in Cartagena. When she began, she recalls, she told her students she didn't understand Spanish in order to encourage them to speak only Palenque in the classroom, and to encourage their parents to use Palenque when meeting with her. Eventually the program expanded and a team of researchers was formed to further develop academic research on Palenque culture and history, to create a written alphabet for the Palenque language, and

later to develop Palenque dictionaries. Dorina began this process in 1986, and by 1989 her initiatives had received the support of government entities, including the Ministry of Education. After passage of Law 70 in 1993, she led the Ministry of Education's ethno-education program, and was part of processes that led to legislation mandating Black history's inclusion in school curriculums, and the strengthening the rights of Black teachers, among other gains.

Dorina currently helps Afro-Colombian women in her community to harness their traditional cultural practices into economic activities that will benefit their communities. This includes helping them develop micro-businesses and receive certifications when necessary to enter formal markets. Women in her community have developed a traditional candies business, a gastronomic tour of the San Basilio de Palenque village, as well as a cooking school to teach young people in the community traditional cooking methods. They are also working on developing and producing organic crops in order to have greater food sovereignty. Dorina considers herself a true defender of Afro-Colombian women's rights and believes that supporting equality for Afro-Colombian women strengthens the overall movement for Afro-Colombian rights.

Julia Eva Cogollo Cabarcas

Julia Eva Cogollo Cabarcas, una psicóloga social y defensora de los derechos humanos quien reside en la región de los Montes de María en la región del Caribe Colombiano, forma parte del Comité de Coordinación Nacional de Proceso de Comunidades Negras (PCN). También es defensora de las mujeres Afrocolombianas en su rol de Coordinadora de Justicia de Género y Derechos Humanos con la organización Movimiento por la Paz.

Al principio de su trabajo con PCN, Julia Eva fue desplazada de su comunidad debido a amenazas de muerte de actores armados. Ella se trasladó a la región del Pacífico de Colombia, y organizó en comunidades cercanas a Cali poco después de la promulgación de la Ley 70 en 1993, la cual concedió derechos territoriales colectivos a las personas Afrodescendientes, entre otras garantías y protecciones críticas. Ella ayudó a las comunidades rurales Afrocolombianas alrededor

de Buenaventura a lograr títulos de tierra colectiva, al tiempo que se enfrentaban con la presencia de grupos armados en sus territorios. En este proceso, Julia Eva preparó a la comunidad para enfrentar amenazas violentas creando planes de contingencia colectivos y mecanismos de defensa pacíficos, y documentando casos de violencia contra la comunidad.

Julia Eva volvió hace varios años a los Montes de María donde trabajó en adjudicación de tierras y temas de titulación, esta vez enfocándose en crear planes de autoprotección para líderes comunitarios y lideresas comunitarias contra actores armados. Durante este tiempo, también trabajó con mujeres que corrían un alto riesgo de violencia sexual y de género cometida por actores armados. Ella sola identificó y asistió a más de 280 víctimas de violencia sexual y de género, mientras al tiempo documentaba sus casos. Ahora, ella trabaja con mujeres en las áreas del Caribe y el Pacífico que enfrentan violencia generalizada. “En algunas de estas regiones, las personas han aceptado la violencia como una forma natural de vida”, dijo Julia Eva. “Cuando esto le sucede a una comunidad, se enfrenta a su pena de muerte”. Ella cree firmemente que ahí es cuando el trabajo de las defensoras y los defensores de los derechos humanos es más valioso.

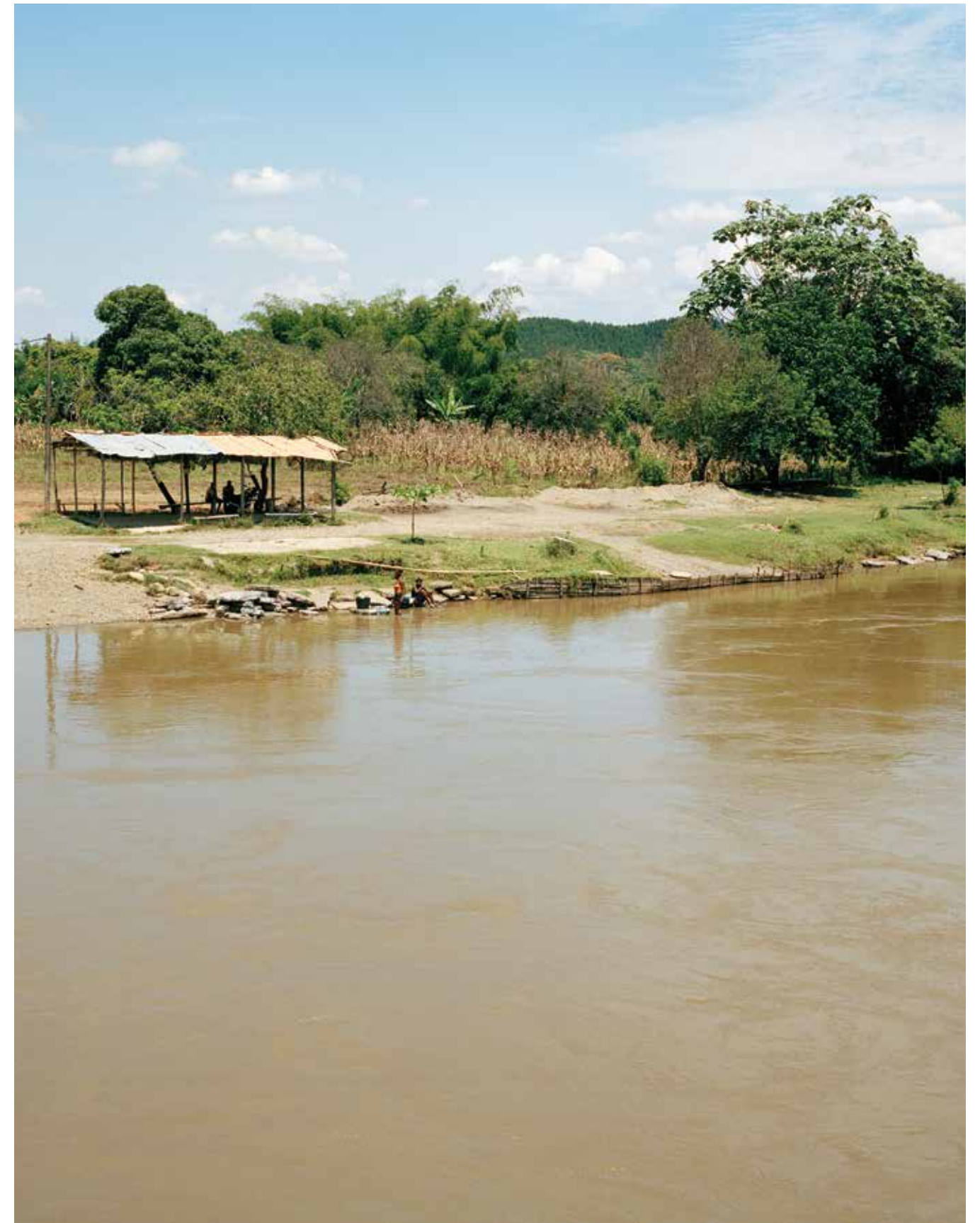
Julia Eva se enfoca en capacitar a las sobrevivientes de violencia sexual y de género con técnicas de sanación y recuperación, mientras les ayuda a acceder a servicios básicos. Ella brinda talleres y actividades en grupo, y aumenta la conciencia sobre violencia de género en la comunidad a través del arte público. Ha realizado numerosas reuniones grupales, reuniones individuales, y talleres comunitarios. Si bien su trabajo puede ser emocionalmente y físicamente agotador, Julia Eva está decidida a defender a las sobrevivientes, así como a las defensoras y los defensores de los derechos humanos que las defienden. “Las defensoras de los derechos humanos de las mujeres arriesgan sus vidas para proteger sus comunidades cuando nadie más lo hace. Es por eso por lo que sigo con mi propia lucha para protegerlas y ayudarlas.”

Julia Eva Cogollo Cabarcas, a social psychologist and human rights defender based in the Montes de María region of Colombia’s Caribbean region, is a member of the National Coordination Committee of Black Communities Process (PCN). She is also an advocate for Afro-Colombian women in her role as the Coordinator of Gender Justice and Human Rights with the organization Movimiento por la Paz.

Early in her work with PCN, Julia Eva was displaced from her community due to death threats from armed actors. She relocated to Colombia’s Pacific region, and organized in communities near Cali soon after the enactment of Law 70 in 1993, which granted collective territorial rights to Afro-descendants, among other critical guarantees and protections. She helped rural Afro-Colombian communities around Buenaventura achieve collective land titling, while also confronting the presence of armed groups in their territories. In this process, Julia Eva prepared communities to address violent threats by creating collective contingency plans and peaceful community defense mechanisms, and by documenting cases of violence against the community.

Julia Eva returned several years later to Montes de María where she again worked on land adjudication and titling issues, this time focusing on creating self-protection plans for community leaders against armed actors. During this time, she also worked with women who were at high risk of sexual and gender-based violence committed by armed actors. She alone identified and assisted over 280 victims of sexual and gender-based violence, while also documenting their cases. Now, she works with women in both the Caribbean and Pacific areas facing pervasive violence. “In some of these regions, people have accepted violence as a natural way of life,” Julia Eva said. “When this happens to a community it is facing its death penalty.” She strongly believes this is when the work of human rights defenders is most valuable.

Julia Eva focuses on empowering sexual and gender-based violence survivors with healing and recovery





techniques, while helping them access basic services. She provides group healing activities and workshops, and increases consciousness around gender-based violence in the community through public art. She has held numerous group rallies, individual meetings, and community-based workshops. While her work

can be emotionally and physically taxing, Julia Eva is determined to defend survivors, as well as the human rights defenders that advocate for them. “Women human rights defenders risk their lives to protect their communities when no one else is doing so. This is why I continue my own fight to protect and help them.”

Leyla Andrea Arroyo Muñoz

Leyla Andrea Arroyo Muñoz es una miembro fundadora de Proceso de Comunidades Negras (PCN) y organiza en Buenaventura, una ciudad de la costa pacífica que alberga el puerto comercial marítimo más grande de Colombia. Después de su entrenamiento como una trabajadora social en la Universidad del Valle en Cali a finales de la década de 1980, ella empezó a organizar jóvenes Negras en conjunción con un largo proceso de planificación basado en la comunidad de Buenaventura, que en ese momento estaba cumpliendo 450 años de aniversario. Su trabajo incluyó recopilar historias orales y documentar la historia y las tradiciones de los vecindarios y comunidades alrededor de Buenaventura. Leyla utilizó esta documentación para un convenio en 1990 de personas Afrodescendientes donde ella cabildeaba por la representación de personas Afrodescendientes en la creación de la nueva Constitución Colombiana de 1991. Fue una figura clave en la organización de personas Afrodescendientes en todo el país durante la redacción de la Constitución — un acto organizativo que eventualmente ayudó a llevar a la creación de PCN. “Ni nosotros ni el gobierno sabíamos cuantos Afrodescendientes existían en Colombia. Esto fue un momento importante en la creación de una cartografía social de personas Afrodescendientes en Colombia, la cual nos concedió acceso a derechos de tierra en nuestras comunidades,” Leyla recuerda.

Después de la aprobación de la ley 70 la cual reconoce los derechos colectivos territoriales de las personas Afrodescendientes, Leyla trabajó arduamente a finales de la década de 1990 para ayudar a comunidades de personas Afrodescendientes a adquirir títulos de tierra colectivo en la región de la costa pacífica utilizando su documentación histórica de la comunidad. Como miembro de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (creadas por legislación en 1993), ella creó planes estratégicos y programas pilotos en Buenaventura y sus áreas circundantes, que permitirían comunidades de personas Afrodescendientes a adquirir títulos de tierra colectivos dentro de los primeros dos años después de la promulgación de la ley 70. El plan se expandió a gran escala, hacia incluir el desarrollo urbano basado en la comunidad de Buenaventura, incluyendo la implementación de proyectos de base de infraestructura. “Hoy, ustedes pueden ver semáforos y calles en Buenaventura. Nosotros hicimos esto por nosotros mismo, desarrollando sistemas y mecanismos para vivir en una sociedad organizada, sin reconocimiento o apoyo por parte del gobierno,” ella explica. Leyla continuó trabajando por los derechos territoriales a través de la década del 2000, mientras que también ayudaba a poblaciones desplazadas que huían de actores armados en la región.

Leyla sigue abogando por la protección de todos los derechos de las personas Afrodescendientes como se garantiza en la Constitución, incluyendo por la protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en las zonas rurales. Ella organiza para defender áreas urbanas y residentes de Buenaventura, quienes no solo tienen que enfrentar el aumento de actores armados violentos, pero también se enfrentan al desplazamiento como resultado de varios proyectos de desarrollo económico patrocinados por el estado, incluyendo la construcción de un nuevo puerto. A pesar de recibir amenazas de muerte en enero de 2019 por su defensa en nombre de derechos colectivos por su comunidad, ella sigue organizando por los derechos de las personas Afrodescendientes. “Nosotros no tenemos ninguna otra opción que resistir,” ella dice.

Leyla Andrea Arroyo Muñoz, a founding member of Black Communities Process (PCN), organizes in Buenaventura, a Pacific coastal city that hosts the largest commercial seaport in Colombia. After training as a social worker at Universidad del Valle in Cali in the late 1980s, she began organizing Black youth in conjunction with a larger community-based planning process in Buenaventura, which at that time was marking its 450-year anniversary. Her work included collecting oral histories, and documenting the history and traditions of the neighborhoods and communities around Buenaventura. Leyla utilized this documentation for a 1990 convening of Afro-Colombians where she lobbied for the representation of Afro-descendants in the creation of the new Colombian Constitution of 1991. She was a key figure in organizing Afro-Colombians throughout the country during the Constitution’s drafting—organizing that eventually helped lead to the creation of PCN. “Neither we nor the government knew how many Afro-descendants existed in Colombia. This was a pivotal moment in the creation of a social cartography of Afro-Colombians, which granted us access to land

rights in our communities,” Leyla remembers.

After the passage of Law 70 which recognized Afro-descendant collective territorial rights, Leyla worked arduously in the late 1990s to help Afro-descendant communities acquire collective land titles in the Pacific coastal region, utilizing her historical community documentation. As a member of the Comisión Consultiva de Alto Nivel para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Colombia’s High Level Advisory Commission for Afro-Colombian communities created by legislation in 1993, she created strategic plans and pilot programs for Buenaventura and surrounding areas that would permit Afro-descendant communities to acquire collective land titles within the first two years after enactment of Law 70. The plan expanded to include large-scale, community-based urban development of Buenaventura, including implementation of grassroots infrastructure projects. “Today, you’ll see streetlights and roads in Buenaventura. We did this by ourselves, developing systems and mechanisms to live in an organized society, without any recognition or support from the government,” she explains. Leyla continued to work for territorial rights through the 2000s, while also aiding displaced populations fleeing armed actors in the region.

Leyla continues to advocate for the protection of all rights of Afro-Colombians as guaranteed by the Constitution, including for the protection of human rights defenders in rural areas. She organizes to defend urban areas and residents in Buenaventura, who not only must contend with a rise in armed actor violence, but also face displacement as a result of several state-sponsored economic development projects, including the construction of a new port. Despite receiving death threats in January 2019 for her advocacy on behalf of collective rights for her community, she continues to organize for Afro-Colombian rights. “We do not have any other option but to resist,” she says.

“Nosotros no tenemos ninguna otra opción que resistir.”

“We do not have any other option but to resist.”



Luz Mary Rosero Garces

Mientras crecía en la década de 1980, Luz Mary Rosero Garces fue testigo de protestas masivas, en las que participaron sus compañeros de su comunidad, exigiendo agua y electricidad en su ciudad natal de Tumaco, en el suroeste de Colombia. Como adolescente a finales de los 90, Luz Mary comenzó a abogar por los derechos colectivos y territoriales y los derechos humanos de las personas Afrodescendientes. Se volvió activa con la Corporación Cultural Afrocolombiana Calipso que estaba vinculada a Proceso de Comunidades Negras (PCN). A través del teatro callejero y la radio comunitaria enfocados en la justicia social, ayudó a promover y crear conciencia sobre una serie de iniciativas claves, como la Ley 70 de Colombia, que garantiza protecciones culturales y colectivas de las personas Afrodescendientes, incluida la titulación colectiva de territorios ancestrales. Después de su bachillerato, continuó organizándose en su comunidad, pero tenía que viajar por horas a la ciudad de Pasto cada dos semanas para ir a la universidad, ya que no había universidades en Tumaco, donde la mayoría de la población es de origen Afrodescendiente. Recuerda la discriminación que enfrentó en la escuela y cómo sabía que tenía que trabajar para abordar la desigualdad que ha dejado a las comunidades Negras en Colombia con altos índices de pobreza y poco acceso a los servicios necesarios.

Por ese tiempo, las defensoras y los defensores de los derechos humanos en Tumaco se enfrentaron con una ola de asesinatos y otra violencia paramilitar. Eventualmente ella se tuvo que reubicar de Tumaco por algunos años para proteger su seguridad. Esto fue duro para ella porque era difícil para su familia, ella dice, pero el hecho de poder participar en

PCN en otros entornos le permitió comprender mejor el contexto de las luchas de liberación Afrocolombianas.

Tratando de abordar la discriminación de género, Luz Mary se unió a un amplio sector de un movimiento organizador de mujeres, pero descubrió que ella y otras mujeres Indígenas y Afrodescendientes tenían que enseñar conciencia interseccional a las organizaciones dominantes de mujeres mestizas. Esto la llevó a profundizar su trabajo, junto con otras feministas Afrodescendientes, por la justicia de género dentro de su propia comunidad. Ella dice que los momentos en los que tuvo que enfrentar el rechazo sexista por parte de algunos compañeros organizadores fueron algunos de los más difíciles en su activismo. Sin embargo, cuando las discusiones dentro de la organización ayudaron a transformar algunas de esas actitudes, esos momentos difíciles se transformaron en algunos de los más potentes y hermosos de su carrera organizadora.

Finalmente, regresó a Tumaco, donde promovió y lideró el crecimiento de varias organizaciones de mujeres y jóvenes. En 2017, Luz Mary fue elegida por una asamblea general para ser miembro de la Coordinación Nacional de PCN. Siendo una miembro dedicada al PCN ha significado estar disponible para su comunidad hasta tal punto que a veces ella siente que ha renunciado a su vida social. Sin embargo, en retorno, ella siente que ha ganado un propósito importante. “Cuando las personas y mujeres me dicen, ‘gracias Luz Mary, usted nos ha ayudado,’ yo sé que lo que hago vale la pena,” ella dice. Ella dice que ve su trabajo con PCN un poco como estando en la película The Matrix, ya que, “usted tiene que estar en una realidad diferente de la de uno mismo, de su propio mundo. Yo siempre tengo que irme de mi propia realidad para ir y defender en este otro mundo que no es el mío.” Ella está agradecida por el entrenamiento que PCN le ha permitido para moverse entre mundos—para abogar por los derechos

en una sociedad que a menudo tiene diferentes valores que los suyos, para proteger los territorios de las comunidades y establecer un ejemplo para sostenibilidad y resiliencia.

Growing up in the 1980s, Luz Mary Rosero Garces witnessed mass protests by her fellow community members, calling for water and electricity in her hometown of Tumaco in southwest Colombia. As a teenager in the late 90s, Luz Mary began advocating for Afro-descendant people’s collective, territorial, and human rights. She became active with the Corporación Cultural Afrocolombiana Calipso which was linked to Black Communities Process (PCN). Through social justice-focused street theatre and community radio, she helped to promote and raise awareness of a number of key initiatives, such as Colombia’s Law 70, which guarantees Afro-Colombians collective and cultural protections, including collective titling of ancestral territories. After high school, she continued to organize in her community, but had to travel hours to the city of Pasto every two weeks for college since there were no universities in majority-Black Tumaco. She recalls the discrimination she faced in school, and how she knew she had to work to address the inequality that has left Colombia’s Black communities with high poverty rates and little access to necessary services.

Around this time, Tumaco’s human rights defenders faced a wave of assassinations and other paramilitary violence. Eventually even she had to relocate from Tumaco for some years to protect her safety. This was hard on her because it was difficult for her family, she says, but participating in PCN in other settings permitted her a deeper understanding of the national context for Afro-Colombian liberation struggles.

Seeking to address gender discrimination, Luz Mary joined a broad sector women’s organizing movement, but found that she and other Afro-descendant and Indigenous women had to teach intersectional awareness to mainstream mestizo





women's organizations. This led her to deepen her work, alongside other Afro-descendant feminists, for gender justice within her own community. She says those moments where she had to confront sexist dismissal by some male fellow organizers were among the more difficult in her activism. When intra-organizational discussions helped transform some of those attitudes, however, those difficult moments transformed into some of the most potent and beautiful of her organizing career.

She ultimately returned to Tumaco, where she has promoted and led the growth of several women and youth organizations. In 2017, Luz Mary was elected by a general assembly to be a member of PCN's National Coordination. Being a dedicated PCN member has meant being available to her community to such an extent that she sometimes feels she has

renounced having much of a social life. In return, however, she believes she has gained an important purpose. "When the people and women say to me, 'thank you Luz Mary, you've helped us,' I know that what I do is worth it," she says. She says she sees her work with PCN a little like being in *The Matrix*, in that, "You have to be in a reality different from your own, from your own world. You have to enter this society's world, this government's world, in order to defend your own world. I always have to leave from my own reality to go to defend it in this other world that isn't my world." She is grateful for the training PCN has permitted her in order to move between worlds—to advocate for rights in a society that often has different values than her own, in order to protect her communities' territories and set a global example for sustainability and resilience.

Rossana Cuama Caicedo

Rossana Cuama Caicedo, conocida como Mamá Cuama, es una mujer Afrocolombiana defensora de los derechos humanos y activista de derechos territoriales colectivos basada en la Costa Pacífica del Valle del Cauca. Siguiendo la adopción de la Constitución Colombiana de 1991, la cual garantiza derechos claves colectivos e individuales para las personas Afrodescendientes, ella trabajó para defender los territorios Afrocolombianos en el Valle del Cauca, en un área rodeada de ríos y arroyos, en contra de la ocupación por parte de fuerzas gubernamentales y otros grupos armados.

Mamá Cuama es también una defensora de larga data en el Valle del Cauca en contra de megaproyectos mineros comerciales dañinos para la región. Con el apoyo de Proceso de Comunidades Negras (PCN), ella ha presionado representantes del gobierno, educándolos acerca de las consecuencias colaterales

perjudiciales de los megaproyectos. Ella subraya la violencia creciente que lleva el establecimiento de megaproyectos en regiones como la de ella, así como la contaminación de agua y tierra causada, por ejemplo, por la minería comercial a gran escala en ríos cerca de Buenaventura.

Mamá Cuama documentó la historia de más de 300 años de las comunidades a lo largo del río Yurumanguí y Raposo como parte de un proceso colectivo de adjudicación de tierra siguiendo la promulgación de la ley 70 de 1993. Ella fue puerta a puerta en las comunidades rurales de más difícil acceso conduciendo un censo de los residentes cerca y a lo largo del río, mientras recogía evidencia de la propiedad territorial colectiva en las regiones. Ella también organizó en decenas de comunidades, educándolos acerca de la ley 70, y acerca de lo que se requería por parte de la comunidad con el fin de conseguir su título colectivo

territorial. “Las personas no sentían que tenían autonomía sobre las tierras, y nosotros sabíamos que había partes interesadas en nuestros territorios. Pero nosotros no teníamos el conocimiento ni la energía para tomar esta lucha por nuestra cuenta. Cuando las personas de PCN vinieron a nuestra región, ellos trajeron consigo la energía y el poder de organización para ir a los ríos y encontrarse con las personas. Esto fue un momento clave en nuestra organización basada en la comunidad,” Mamá Cuama recuerda. Ella también abogó en nombre de comunidades Afrocolombianas en contra de la designación de tierras como “baldío,” lo cual habría permitido al estado aprovecharse de ellos.

Mamá Cuama ha representado su comunidad a nivel internacional, incluso viajando a Ginebra para protestar por ciertas disposiciones de paquetes de ayuda internacional a Colombia que han llevado al desarrollo destructivo de megaproyectos y al desplazamiento de su comunidad.

Rossana Cuama Caicedo, known as Mamá Cuama, is an Afro-Colombian human rights defender and collective territorial rights activist based in the Coastal-Pacific Cauca Valley. Following adoption of the 1991 Colombian Constitution, which guaranteed key collective and individual rights for Afro-Colombians, she worked to defend Afro-Colombians’ territories in the Cauca Valley, in an area surrounded by rivers and streams, against occupation by governmental forces and other armed groups.

Mamá Cuama is also a longstanding advocate in the Cauca Valley against harmful commercial mining megaprojects in the region. With the support of Black Communities Process (PCN), she has lobbied government representatives, educating them about the megaprojects’ harmful collateral consequences. She underscores the rampant violence that follows establishment of new megaprojects in regions like hers, as well as the water and land pollution caused

by, for example, large-scale commercial mining in rivers near Buenaventura.

Mamá Cuama documented the more than 300-year-old history of communities along the Yurumanguí and Raposo Rivers as part of a collective land adjudication process following the enactment of Law 70 of 1993. She went door to door in the most difficult to access rural communities conducting a census of residences near and along the rivers, while gathering evidence of collective territorial ownership in the regions. She also organized in dozens of communities, educating them on Law 70, and what was required of communities in order to achieve their collective territorial titles. “People did not feel they had autonomy over their land, and we knew there were interested parties in our territories. But we did not have the knowledge nor the energy to take this fight on our own. When the people from PCN came to our region, they brought with them the energy and organizing power to go to the rivers and meet with people. This was a key moment in our community-based organizing,” Mamá Cuama remembers. She also advocated on behalf of Afro-Colombian communities against government designation of their lands as “wasteland,” which would have allowed the state to seize them.

Mamá Cuama has represented her community internationally, even traveling to Geneva to protest certain provisions of international aid packages to Colombia that have led to destructive megaproject development and displacement of her community.

Página opuesta: Sara Quiñonez y Tulia Maris Valencia son miembros de PCN detenidas injustamente por su defensa de los derechos humanos.

Opposite page: Sara Quiñonez and Tulia Maris Valencia are PCN members unjustly detained for their human rights advocacy.



SOBRE PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS

Formado en 1993, Proceso de Comunidades Negras (PCN) es un colectivo Afrocolombiano de más de 120 organizaciones de base Afrodescendientes, Consejos Comunitarios e individuos dedicados a elevar la conciencia Negra, luchar contra la discriminación racial, la exclusión y la injusticia social, y desarrollar un marco legal y político para el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la autodeterminación de las personas Afrodescendientes.

Página site: renacientes.net

Facebook: facebook.com/PCNcolombia

Twitter: [@renacientes](https://twitter.com/renacientes)

SOBRE MADRE

MADRE es una organización internacional de defensa de derechos humanos de la mujer que se asocia con organizaciones comunitarias lideradas por mujeres en la primera línea de la guerra, el desastre y sus consecuencias para satisfacer necesidades urgentes y crear soluciones duraderas a la crisis.

Página web: madre.org

Facebook: facebook.com/madre.org

Twitter: [@MADREspeaks](https://twitter.com/MADREspeaks)



ABOUT BLACK COMMUNITIES PROCESS

Formed in 1993, Black Communities Processes (PCN) is an Afro-Colombian collective of over 120 Afro-descendant grassroots organizations, Community Councils, and individuals, dedicated to raising Black consciousness, fighting racial discrimination, exclusion and social injustice, and developing a legal and political framework for the recognition and respect of Afro-Descendants' human rights and self-determination.

Website: renacientes.net

Facebook: facebook.com/PCNcolombia

Twitter: [@renacientes](https://twitter.com/renacientes)

ABOUT MADRE

MADRE, an international women's rights organization, partners with community-based, women-led organizations on the frontlines of war, disaster and their aftermath to meet urgent needs and create lasting solutions to crisis.

Website: madre.org

Facebook: facebook.com/madre.org

Twitter: [@MADREspeaks](https://twitter.com/MADREspeaks)



Gracias a la Programa de Operaciones de Paz y Estabilización de Asuntos Globales de Canadá por su generoso apoyo.
Thank you to the Peace and Stabilization Operations Program of Global Affairs Canada for its generous support.